



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Reseñas

ARGUMENTATIVAS

RESEÑA DEL AMPARO EN REVISIÓN 344/2012

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“ES VÁLIDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA”



**RESEÑA ARGUMENTATIVA DEL
AMPARO EN REVISIÓN 344/2012**

**MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO**

**SEGUNDA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**“ES VÁLIDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA”**


*Cronista: Lic. Héctor Musalem Oliver **

El 8 de enero de 2001, una persona ingresó al Programa de Ciencias Sociales a nivel Doctorado con área de concentración en Relaciones de Poder y Cultura Política de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Concluyó sus estudios en 2003, sin realizar los trabajos y trámites conducentes para obtener el grado de Doctor.

En ese contexto, la legislación vigente para estudios de posgrado en enero de 2001, era el Reglamento de Estudios Superiores de dicha universidad de 1º de agosto de 1996, con una modificación en su artículo 45, de 28 de abril de 1997, sin que en éste se hiciera referencia al plazo para sustentar defensa de tesis.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2011 dicha persona presentó solicitud de prórroga para adquirir nuevamente la calidad de alumno y presentar trabajo de tesis, a efecto de que la misma fuera revisada y, una vez hecho esto en los términos de la legislación aplicable, se revisara la tesis de grado por 3 sinodales.

* Funcionario adscrito a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.




En respuesta a su petición, por medio de un oficio signado por el Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad, se le informó que resultaba improcedente recibir cualquier solicitud de manera extemporánea, toda vez que dicho Consejo se encontraba jurídicamente imposibilitado para resolver sobre la misma, al respecto, citó como fundamento el artículo Segundo Transitorio¹ de la Reforma al Reglamento de Estudios Superiores.

Inconforme con la determinación, el 1° de abril de 2011, el solicitante de la prórroga presentó un escrito en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por medio del cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana y 67 funcionarios más de esa universidad. Igualmente, impugnó los artículos 47, 48, 49, 52 y su artículo Transitorio Segundo del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM, así como el oficio de respuesta.

En sus conceptos de violación argumentó que los actos reclamados transgredían los artículos 14 y 16 de Constitución Federal (retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos e indebida fundamentación y motivación).

Del asunto conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, durante el procedimiento, con motivo del contenido de los informes justificados, el promovente amplió su demanda para agregar como acto reclamado la falta de notificación de la puesta en vigor de la reforma al Reglamento ya citado.

¹ SEGUNDO. Quien haya perdido la calidad de alumno de posgrado por vencimiento del plazo máximo antes de la entrada en vigor de la presente reforma, podrá presentar la solicitud respectiva, a más tardar, dentro de los seis trimestres lectivos siguientes al inicio de la vigencia de esta reforma.




Así las cosas, se ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en turno, quien en sentencia de 2 de diciembre de 2011, sobreseyó en el juicio y concedió la protección constitucional solicitada.

Inconformes con la decisión, el Colegio Académico y el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, ambos de la UAM, interpusieron recurso de revisión.

Mediante acuerdo de 3 de febrero de 2012, el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso interpuesto, mismo que fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, quien dictó sentencia el 13 de abril de dicha anualidad, en la que desechó el recurso, dejó intocado el sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo Segundo Transitorio del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM, aprobado en sesión 283 del Colegio Académico y publicado en el suplemento del Semanario de la Universidad Autónoma Metropolitana el 5 de marzo de 2007.

Recibidos los autos en el Alto Tribunal, su Presidente, ordenó formar y registrar el toca de revisión 344/2010, asumir su competencia y turnar el asunto a la **señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos**, radicar en la Segunda Sala y notificar a las autoridades responsables, así como al Procurador General de la República.




De esta manera, en la sesión del miércoles 4 de julio de 2012, la Ministra ponente presentó ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su proyecto de sentencia, en el cual propuso como puntos resolutivos revocar la sentencia recurrida y no conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

La propuesta anterior fue aprobada por unanimidad de 5 votos de los **señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ponente Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Ministro Presidente Sergio A. Valls Hernández.**

De manera previa al estudio de los agravios la Segunda Sala precisó, que quedó firme la determinación de la Juez Federal, en el sentido de que los actos reclamados son provenientes de autoridad para efectos del juicio de amparo, por ello, al margen de que se comparta o no tal criterio, constituía cosa juzgada y no podía abordarse en el estudio.

Precisado lo anterior, se indicó que los agravios propuestos eran fundados, ya que le asistía la razón a la autoridad recurrente cuando afirmó que en la resolución de primera instancia se hizo un estudio parcial del ordenamiento impugnado, sin considerar la autonomía reglamentaria de que goza la Universidad Autónoma Metropolitana y el contexto en que está inserto el artículo Segundo Transitorio que fue declarado inconstitucional.

Es decir, la juez de Distrito respecto a dicho precepto, en suplencia absoluta de la queja, determinó que era violatorio del derecho humano a la educación contenido en el artículo 3º constitucional y en diversos instrumentos internacionales, lo que lo



llevó a conceder el amparo solicitado, en contra de la norma y del oficio de respuesta.

En ese contexto, la Segunda Sala puntualizó que el artículo 3° constitucional consagra, en su primer párrafo,² el derecho humano de todo individuo a recibir educación. Ordena que el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), imparta educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y dispone que la educación preescolar, primaria y secundaria conformen la educación básica y que ésta y la media superior sean obligatorias.

Por su parte, la fracción VII³ establece el reconocimiento de la autonomía universitaria y proviene de la reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* de 9 de junio de 1980, cuya importancia específica deriva de que eleva a la categoría de norma constitucional la posibilidad de transformar las universidades e instituciones de educación superior en autónomas.

De igual manera, la Sala indicó que, el Pleno del más Alto Tribunal se refirió al concepto de la autonomía universitaria en la tesis siguiente:


² Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

(...)

³ Artículo 3°. (...)

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

(...)



AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.⁴


Por virtud de esta autonomía, los señores Ministros señalaron que, las universidades cuentan con independencia normativa y orgánica plena, lo que significa que quedan en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, así como de administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado, con la única salvedad de que respeten los derechos constitucionales que rigen en nuestro país.

De manera que, la Universidad Autónoma Metropolitana expidió su Reglamento de Estudios Superiores, que sirvió de fundamento para informar al quejoso la improcedencia de su solicitud.

La Sala puntualizó que, el particular concluyó sus estudios de doctorado y que posteriormente solicitó una prórroga para que se le reconociera el carácter de alumno, lo que le permitiría presentar su tesis, a efecto de obtener el grado académico. Es decir, no requirió que se le permitiera tener acceso a recibir educación, pues culminó sus estudios, lo que pretendía era obtener la patente que lo avalara como Doctor, de ahí que en su demanda no haya reclamado violación al derecho contenido en el artículo 3º constitucional.

No obstante, se indicó que debía determinarse si el artículo Segundo Transitorio reclamado vulneraba el derecho humano a la educación o si, como lo afirmó la autoridad recurrente, constituía el

⁴ Véase, Novena Época. Registro: 187311. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, abril de 2002, Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. XXXVI/2002. Página: 576.




ejercicio de su autonomía, que no obstaculizaba, ni coartaba prerrogativa alguna.

Así las cosas, los señores Ministros mencionaron que el Reglamento de Estudios Superiores contenía las disposiciones normativas relacionadas con uno de los objetivos fundamentales de la universidad, que era la impartición de educación superior a nivel de licenciatura, de especialización, de maestría y de doctorado y cursos de actualización.

Tales disposiciones, en específico el artículo Segundo Transitorio, no eran contrarias al texto del artículo 3º de la Constitución Federal, ni de los diversos instrumentos internacionales que invocó la juez en su sentencia, pues no privaban a los particulares del derecho humano a la educación; reglamentan la forma en que la universidad presta el servicio educativo, lo que era acorde con la autonomía de que se había dotado a las universidades públicas, y que les permitía establecer requisitos de ingreso y permanencia en el centro de estudios.

En el caso, la Segunda Sala determinó que el establecimiento de plazos y condiciones para conservar la calidad de alumno y solicitar prórroga de la misma, obedecía a la finalidad de fomentar una adecuada planeación y evaluación de posgrados, favorecer la eficiencia terminal de los alumnos y otorgar mayor certeza en cuanto a la matrícula y permanencia de éstos, lo que era acorde con los fines constitucionales a que se refiere la fracción VII del artículo 3º. Los particulares que deseen recibir educación en los niveles en que la imparte la Universidad Autónoma Metropolitana tienen acceso a ella, en los términos y condiciones que fije su normatividad.



Posteriormente, la Sala realizó el estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda, cuyo examen no se abordó; en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.⁵

Conforme a lo anterior, se concluyó que para estar en posibilidad de determinar si el artículo transitorio impugnado quebrantaba el principio de irretroactividad, era menester establecer si con las normas vigentes antes de la reforma, el promovente del amparo había adquirido derechos que se afectaban.


Para tal efecto, cabía traer a colación que el quejoso inició sus estudios de posgrado en el año 2001 y terminó la totalidad de créditos en el año 2003, restando únicamente la presentación y aprobación de la tesis, para obtener el grado académico, trámite que hasta el año 2011 no había realizado. En esa época (2001–2003), al igual que ahora, el reglamento disponía que quienes habían interrumpido sus estudios podían adquirir nuevamente la calidad de alumnos cuando no hubiere vencido el plazo máximo establecido (artículo 47).

El artículo 45 del reglamento establecía como plazo máximo para conservar la calidad de alumno en posgrado, el doble de su duración normal prevista, plazo que contará a partir de la primera inscripción. En el caso del posgrado, el plazo máximo era de 18 trimestres, término que para el quejoso venció en el año 2006.

⁵ Artículo 91.- El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

I.- Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

(...)



El reglamento vigente en esa época no contemplaba la posibilidad de solicitar una prórroga una vez vencido el plazo máximo. La reglamentación sufrió modificaciones en el año 2007, y por virtud de esa reforma se adicionaron los artículos 47, 48 y 49 y se emitió el artículo Segundo Transitorio.

Ahora bien, la Sala advirtió que en el artículo Segundo Transitorio se estableció un beneficio adicional, que consistía en que además del plazo que se concedió en el artículo 49, de 6 trimestres después de vencido el plazo máximo, se concedió otro, para quienes habían perdido la calidad de alumno de posgrado por vencimiento del plazo máximo antes de la entrada en vigor de la reforma.

Por lo que los interesados pudieron presentar la solicitud respectiva, dentro de los 6 trimestres lectivos siguientes al inicio de la vigencia de las nuevas disposiciones. Consecuentemente, indicaron los señores Ministros, que la norma en análisis no resultaba violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Suprema, pues el quejoso, al amparo de la legislación anterior, no tenía el derecho adquirido de solicitar una prórroga una vez vencido el plazo máximo para permanecer en la universidad.

Respecto al segundo concepto de violación, la Sala mencionó que era igualmente infundado, pues la indebida motivación del oficio reclamado se hacía depender de la aplicación de una norma que el quejoso consideró inconstitucional. Sin embargo, no adolecía del vicio de retroactividad que se le atribuía y, en esas circunstancias, no era violatorio de las garantías del particular.